

Giancarlo Elia Valori

El subdesarrollo de América Latina

*Conferencia dictada bajo los auspicios
del Instituto Juan XXIII de la Univer-
sidad Centroamericana.*

La profunda crisis social de América Latina responde a las mismas causas y reclama las mismas soluciones que corresponden a todo el sector subdesarrollado de la humanidad, formado por dos tercios de la población de la Tierra.

Esta crisis obedece al atraso económico de los países de Asia, Africa y América latina en contraste con los enormes adelantos registrados en las naciones industriales del hemisferio norte acelerados en nuestra época merced a la revolución científica y técnica de la posguerra.

Las encíclicas de Su Santidad Juan XXIII y Su Santidad Paulo VI, así como las conclusiones del Concilio Vaticano II, examinan esta cuestión a la luz de un dato objetivo indiscutible: la distancia que separa al mundo subdesarrollado del mundo desarrollado agranda progresivamente. Los beneficios de este mundo moderno del átomo, la automatización y la exploración espacial, hacen a las naciones ricas cada día más ricas y a las naciones pobres cada día más pobres en virtud de la ley de la concentración en los polos del poder económico mundial.

La desigualdad así creada engendra no sólo una reacción ética sino que produce una peligrosa dislocación del equilibrio social de la humanidad, con todas sus graves consecuencias en el campo de la misma economía internacional y en el mantenimiento de la paz y de la convivencia civilizada y democrática.

El hombre como tal y la sociedad universal asisten a la agravación de la desigualdad entre los pueblos con justificada alarma. La Iglesia Católica toma posición en el problema como corresponde a su misión divina. Su encuesta asume términos concretos: pregunta cuáles son las causas de esta injusticia, cuales sus genuinas soluciones y cuáles los métodos aconsejables para lograr estas últimas.

Las tres indagaciones son inseparables, puesto que el examen de las causas lleva a la programación de las soluciones y ésta a la elección de los métodos. El hilo que une dialécticamente los hitos de este razonamiento es fácilmente discernible y al seguir su trayectoria será relativamente fácil construir una eficaz estrategia internacional para resolver el problema del subdesarrollo en forma orgánica y científica. Contrariamente, si eludimos ese método estamos expuestos a caer en la improvisación, en la superficialidad y, lo que sería más grave, en la demagogia.

I.- LAS CAUSAS

La acumulación de toda la riqueza del mundo en su sector industrial es un proceso histórico que no podía dejar de producirse pues estaba determinado por la relación de intercambio entre dicho sector de países y el mundo que le proveía de materias primas para sus fábricas y de alimentos para sus poblaciones. Las colonias de Asia y Africa y las repúblicas independientes de América latina son la reserva de minerales, productos agrícolas y naturales que el desarrollo capitalista necesita para su constante expansión. Básicamente, esta división del trabajo en el proceso productivo de la humanidad es intrínsecamente desfavorable para los proveedores de productos primarios, pues el esfuerzo social — y su consiguiente remuneración — necesario para producir dichas materias primarias es siempre inferior al que se requiere para producir manufacturas industriales. El sector campesino y minero en cualquier economía está rezagado respecto del sector industrial, tanto en el valor económico del producto cuanto en la condición social del productor.

Esta desigualdad básica se acentúa en la medida en que progresa la tecnología y se incorporan nuevos descubrimientos que enriquecen cualitativamente el proceso de producción. Es mayor la diferencia que existe hoy entre los grandes emporios industriales modernos y el sector agrominero, que el que existía en la época inicial de la industria entre los telares y fundiciones primitivos y la economía agraria de la época.

Así también, la relación de los precios de intercambio entre productos primarios e industriales era menos desigual en la etapa primitiva del capitalismo que en la actualidad. Con el producto de sus ventas en el mercado mundial, los pueblos agromineros del siglo XVIII y XIX podían abastecerse en los centros industriales de los aperos agrícolas para su labor y de los bienes de consumo para su vivienda, vestido y nutrición, además de lo que se procuraba en su propio habitat

Esa relación tradicional ha variado fundamentalmente en nuestra centuria, a medida que se acentúa el progreso tecnológico en los centros industriales y permanece estancada la economía agrominera de los países subdesarrollados.

Los efectos del progreso científico—tecnológico son los siguientes:

1.- Aumentan la calidad, diversidad y precios de los productos industriales, mientras se mantienen estacionarios los de los productos primarios. Los países de producción primaria necesitan exportar crecientes volúmenes de sus productos para poder importar las costosas máquinas y manufacturas modernas.

2.- En los países desarrollados, el capital financiero y los insumos industriales incrementan la productividad del agro al convertir las granjas en verdaderas fábricas. Por consiguiente estos países tienden a autoabastecerse de materias agropecuarias y a reducir sus importaciones de las naciones subdesarrolladas. Levantan barreras aduaneras contra estas importaciones para proteger a sus propios productores agrícolas.

3.- El laboratorio crea materiales sintéticos que substituyen a los productos naturales, como las fibras animales y vegetales, el vidrio, la madera, el hierro, el caucho, etc.

Otros factores contribuyen al retroceso de los países de producción primaria en el comercio mundial:

a) La explosión demográfica y la implantación de incipientes industrias livianas en muchos países, aumenta cuantitativamente y cualitativamente la demanda interna de los alimentos y materias primas locales y se reducen proporcionalmente los saldos exportables, con la consiguiente disminución de la capacidad de compra de dichos países en el exterior.

b) La aparición del sindicalismo en esos países, que, incluso, llega a organizar algunos sec-

tores del campesinado, eleva los niveles salariales y el consumo popular de bienes no esenciales, como los artefactos eléctricos, radios y televisores, vehículos automotores, cosméticos, vestido de calidad, vivienda moderna y otros rubros de confort. Contribuye a esta diversificación de la demanda de los consumidores el efecto de "demostración" o sea el ejemplo de las sociedades adelantadas a través de las comunicaciones y del cine mundial.

La combinación de estos elementos determina la crisis económica de los países subdesarrollados que dependen del comercio internacional de sus producciones para subsistir. Su participación en el comercio mundial es cada vez menor.

Algunas cifras bastarán para ilustrar el deterioro de las economías primarias en relación con el gran avance de las economías industriales.

1.— La capacidad de compra — o sea el índice de importaciones de las naciones desarrolladas aumenta constantemente mientras disminuye la de los países atrasados. En 1948, las naciones desarrolladas importaban el 68 o/o del valor de las importaciones mundiales contra el 32 o/o que correspondía al sector subdesarrollado. En 1964 estos porcentajes fueron del 78 o/o para las primeras y del 22 o/o para las segundas.

2.— Veamos el deterioro en el valor unitario de las exportaciones. Tomando como índice 100 el año 1955, los artículos industriales subieron a 109 en el año 1965, mientras los productos primarios bajan a 94.

3.— Las reservas de oro y divisas en poder de las naciones industriales eran ligeramente superiores al valor de 40.000 millones de dólares en 1955 y aumentaron a más de 60.000 millones en dólares en 1966. En el mismo lapso, las reservas de los países subdesarrollados disminuyeron levemente, manteniéndose a un promedio de 10.000 millones de dólares.

4.— El deterioro de los términos de intercambio de las naciones rezagadas se mide por el siguiente índice: tomando el índice 100 para 1958, el índice de los países industriales subió en 1964 a 104, mientras el de los países de producción primaria bajó a 97.

5.— La balanza comercial del conjunto, de los países subdesarrollados — excluidos los países exportadores de petróleo — arrojó saldo positivo hasta las vísperas de la segunda guerra mundial. En el período 1953—1957, el balance se tornó negativo, de casi 3.000 millones de dólares. En el período 1962—1966 el déficit llegó a 4.500 millones de dólares.

6.— Las exportaciones de América latina representaban hace veinte años más del 11 o/o de las exportaciones mundiales. Actualmente esa proporción ha descendido a menos del 6 o/o.

La conclusión es que está en quiebra el esquema de la división internacional del trabajo. Dicha quiebra afecta a ambos términos de la ecuación. Perjudica al sector subdesarrollado al condenarlo al subconsumo y al estancamiento de su crecimiento económico. Perjudica al sector desarrollado al reducir la demanda mundial de sus productos industriales. Dos tercios de la población del globo están prácticamente excluidos de la expansión del comercio mundial y de la sociedad de consumo en masa que caracteriza nuestra época.

Se llega así a la identificación correcta de la causa de la pobreza, la ignorancia y la injusticia social que son rasgos comunes a todas las regiones subdesarrolladas. La causa es una estructura económica atrasada que se limita a producir y vender bienes primarios en el cuadro de una economía mundial que produce e intercambia cada vez más bienes industriales. Mientras los países subdesarrollados no integran su producción agrícola y minera en las formas avanzadas de la producción industrial, sus ingresos serán insuficientes para asegurar el bienestar material y espiritual de sus pueblos. Aunque se lograra repartir mejor dichos ingresos, por medio del impuesto, la división de la propiedad o la expansión de los servicios sociales del Estado, las naciones seguirían siendo pobres y dependientes de una relación de intercambio mundial que es progresivamente desfavora-

ble para ellas. No se puede mejorar la condición de los pueblos repartiendo pobreza. Los latifundistas, los "ricos" y las oligarquías económicas y políticas de las naciones atrasadas forman parte del mismo régimen de atraso y estancamiento que sus obreros y peones. Se podría expropiar a todos los terratenientes y acabar con todos los dictadores y malos políticos y sentar las bases de una teórica sociedad igualitaria y democrática, pero esa sociedad idealmente justa sería impracticable y utópica mientras subsistiera el atraso de la estructura económica agrominera y no se efectuara el salto cualitativo hacia la economía industrial integrada. El problema social de la pobreza en el mundo subdesarrollado no es producto de la indiferencia o el egoísmo de las clases pudientes ni de la corrupción política, aunque estos factores contribuyan a exagerar los males sociales. La única causa permanente y profunda es el subdesarrollo económico.

Asimismo puede demostrarse que países que han alcanzado discretos niveles de bienestar y de cultura en el mundo subdesarrollado se enfrentan hoy al mismo problema que aflige a los países más pobres y atrasados: los resultados de sus economías nacionales no alcanzan para sostener el nivel social de tiempos anteriores y existen en dichas naciones relativamente prósperas las mismas o peores tensiones sociales que en las más atrasadas. Tal es el caso en América latina de Argentina y Uruguay, dos países de población blanca, con la más baja tasa de analfabetismo de la región, que ocuparon en el pasado un lugar destacado en el intercambio mundial y que no tuvieron hasta hace pocas décadas problemas de deterioro monetario ni de inflación y que, sin embargo, están sumidas actualmente en profunda crisis. Sus productos agropecuarios no encuentran mercado en el exterior o se venden a precios cada día menos retributivos y sus industrias livianas siguen dependiendo de la importación de combustibles, materia prima y equipos que ya no pueden adquirirse con el producto de las exportaciones en virtud del deterioro de la relación de intercambio. Aunque argentinos y uruguayos gozan de una dieta promedio muy superior a la de sus hermanos de otros países, sus salarios se insumen casi totalmente en alimentación y en vestido y se achica progresivamente el margen aplicable a educación, salud y esparcimiento. Mientras un obrero de Estados Unidos destina a alimentación el 25 o/o de su salario, un obrero argentino se ve obligado a gastar el 60 o/o de su ingreso en alimentos. Este solo dato sirve para señalar las diferencias de bienestar entre un país desarrollado y otro que no lo es, aunque la Argentina es el menos pobre y el socialmente más homogéneo de América latina. Y esta diferencia no emana del hecho de que el obrero argentino sea más "explotado" por sus patrones que el norteamericano, ya que es sabido que la clase obrera argentina ha obtenido de sus empleadores más beneficios sociales que su colega norteamericano en términos de poder sindical y de lucha por el salario. La diferencia emana de estructura socioeconómica de una y otra nación y de la abismal distancia que separa el ingreso nacional por habitante de Estados Unidos y la Argentina, o del conjunto de los países desarrollados de los que no lo son.

II.- LAS SOLUCIONES

Conocidas las causas de la crisis de los países subdesarrollados, entre ellos los de América latina la prescripción de las soluciones surge naturalmente. Si la causa es el atraso de la estructura de producción, la solución no puede ser otra que la transformación de esa estructura. Si la riqueza del mundo se concentra en las potencias industriales y si las no industrializadas se estancan o retroceden, el único camino racional para rectificar esta tendencia es el de promover la industrialización de las regiones de producción agrominera. Se trata, en suma, de reproducir en estas regiones y a fines del siglo XX el proceso que siguieron las actuales naciones industriales a partir de fines del siglo XVIII. Este proceso, que se extendió durante casi dos centurias, puede hacerse hoy

mucho más rápidamente mediante los extraordinarios recursos financieros y técnicos de que dispone hoy la humanidad y que fueron de muy lenta acumulación en el pasado.

Por otra parte, la relación clásica entre el mundo industrial y el mundo subdesarrollado deberá cambiar. En los orígenes de la era industrial y hasta el presente la relación consistió en el intercambio dentro del esquema de la división internacional del trabajo: las máquinas del sector industrializado trabajaban con materias primas importadas de las regiones subdesarrolladas y también se importaban de estas últimas gran parte de los alimentos para el consumo de las naciones adelantadas. Ya se ha visto anteriormente que esta relación ha sucumbido en nuestros días porque su consecuencia es el pauperismo progresivo del mundo subdesarrollado, y su retroceso en los intercambios mundiales. Dos tercios de la población del mundo carecen de poder adquisitivo internacional. Por consiguiente, también se perjudica el mundo desarrollado que no puede vender a este sector paupérrimo sus máquinas y manufacturas al tiempo que los mercados internos de los países adelantados y sus mercados regionales como el MCE se saturan con el tremendo volumen de bienes y servicios producido a impulsos de la tecnificación y automatización de la producción. El sector de naciones industriales está obligado a desarrollar mercados en ultramar con creciente poder adquisitivo. Y el único mercado solvente para los bienes de capital y artículos industriales es el que formarían otras nuevas naciones industriales surgidas en el tercer mundo.

La transformación de economías primarias en economías industriales se hace como se hizo en toda la historia, cualesquiera hayan sido las ideas o los regímenes políticos en boga. Las leyes de este proceso rigen lo mismo para los modos de producción capitalista que para los de la producción socialista. El tránsito de la sociedad agraria a la industrial se hace cuando una parte considerable del excedente (Ahorro) de la economía primitiva rural se invierte en el financiamiento de la base industrial (plantas energéticas, siderurgia, química, infraestructura de comunicaciones y transportes, servicios). Esta transferencia se realiza en forma gradual y espontánea en algunos casos o en forma compulsiva y programada en otros. Pero la esencia del sistema es la misma: la acumulación y la inversión. Es siempre un fenómeno puramente económico, aunque pueda tener consecuencias sociales.

Por consiguiente, las naciones que están obligadas a salir de la crisis crónica de sus economías primarias, necesitan ejecutar una estrategia de política económica que consiste en fomentar el ahorro interno, desalentar los consumos no esenciales y en aplicar ese capital no en cualquier gasto sino en inversiones que aseguren la multiplicación, la reproducción de ese mismo capital. En esto consiste la dinámica del desarrollo. Por eso no es indiferente que el capital acumulado se invierta en industrias de consumo o en la industria de base; esta última es la que provee de energía y de materias primas y maquinaria para multiplicar la producción de toda clase de bienes. La política económica de un país que inicia el "despegue" debe programarse deliberadamente para acelerar el ritmo de la producción. Cuando esta decisión ocurre en una época como la nuestra, en que también se acelera el deterioro de las economías primarias, no puede esperarse un desarrollo gradual y espontáneo de la capitalización y la inversión. Es indispensable redoblar el esfuerzo y apurar el trámite del "despegue". Por eso, cuando la tasa de formación de capital interno es baja (como ocurre en todos los países atrasados) o no es posible comprimir el consumo popular que ya está en niveles de mera subsistencia, el aporte de capital internacional no solamente es útil sino irrenunciable. Los "nacionalistas" que se oponen indiscriminadamente al ingreso de capital exterior en una economía en "despegue" deben ser lógicos consigo mismos y proponer la alternativa de hambrear al pueblo o postergar indefinidamente el desarrollo. El capital para las inversiones no surge de la nada. O se traslada del sector del consumo al sector de la producción o se lo trae del exterior, o se combinan racionalmente ambas fuentes de modo de no infligir exagerados sacrificios a los sectores populares.

Surge así la falacia de algunas soluciones que se ofrecen como panaceas para aliviar la pobreza de los pueblos atrasados.

Por tratarse de las más difundidas en América latina y aceptadas por importantes sectores adscriptos a la doctrina del cambio estructural, inclusive entre personalidades renovadoras de la Iglesia Católica, se examinarán aquí algunas de estas soluciones que no van al fondo del problema sino que se presentan como paliativos.

1.- Redistribución del ingreso: El espectáculo de extrema miseria de la mayoría del pueblo y de insolente exhibición de lujo de una minoría, induce a algunos reformadores sinceros a sostener que la crisis de América latina consiste en esta tremenda injusticia y que su solución debe ser una acción del Estado y de la sociedad tendiente a redistribuir la riqueza existente.

Es claro que en este caso se prescinde siempre del "quantum" de la riqueza existente o del ingreso nacional. Se quiere repartir lo que existe y no lo que debiera existir. Y lo que existe, en condiciones de subdesarrollo, es siempre pobreza, un bajísimo ingreso nacional, ingreso nacional en progresivo deterioro, lo que, a la larga, significa un déficit del ingreso neto. En verdad, una de las características del subdesarrollo es la evidencia de las desigualdades sociales: unos son muy ricos y otros muy pobres. Pero esta riqueza y esta pobreza son siempre relativas: en condiciones en que toda la sociedad subdesarrollada es "pobre", son pobres también los ricos en relación con clases altamente colocadas de los países desarrollados; es tan pobre un terrateniente ecuatoriano frente a uno norteamericano como un campesino boliviano frente a uno igual suyo inglés.

Los partidarios de ese reparto social no propugnan, desde luego, un "reparto" de la riqueza, como se postula el reparto de tierra. Sería poco menos que imposible realizar la idea del reparto de la riqueza. Lo que se propone, pues, es una más justa; equitativa, distribución del "ingreso nacional". ¿Cuál puede ser la forma de esta distribución? El aumento de los salarios se diluye en la inflación y la carestía de la vida; los beneficios sociales (jubilaciones, pensiones, servicios asistenciales) requieren fondos que surgen del impuesto sobre el trabajo y el capital. Sólo queda un recurso: la participación en las ganancias. Debe admitirse que este postulado se ha hecho patrimonio de importantes núcleos de los cristianos sociales o de los partidos democristianos así como de grupos de la Iglesia renovadora. La participación en las ganancias lleva implícita la participación en la dirección de la empresa, en el control de la contabilidad y hasta en la fijación de los precios.

¿Pero, cuál es el significado económico de esta idea en las condiciones de países subdesarrollados? Lo que caracteriza al subdesarrollo en una de sus facetas es la baja densidad del capital, derivada de las igualmente bajas inversiones adicionales, que se originan a su vez en el bajísimo ahorro. Carentes de un vasto y liberal sistema crediticio, imposibilitadas de llegar a ese desideratum que es la autofinanciación de las inversiones para renovación del equipo, las empresas de los países subdesarrollados arrastran su existencia en muy bajos niveles tecnológicos y de productividad. Sobre esos bajos niveles productivos y sobre el escaso ahorro cae la voracidad fiscal con su superposición de impuestos. Los escasos ahorros son a la vez deteriorados progresivamente por la inflación. Así, las ganancias que aparecen en los libros muy grandes si se las compara con la de los países altamente desarrollados se diluyen en la marea de la inflación y de los impuestos; son ganancias que convierten en pérdidas cuando se procede a renovar los stocks de materias primas o los equipos. De modo, pues, que el significado económico de la participación en las ganancias no es otro que agregar un nuevo obstáculo al ahorro y acumulación para la ampliación o para el perfeccionamiento de la empresa, única fuente de progreso tanto para el empresario como para el obrero.

¿Cuál es el significado social de esta reivindicación? En las condiciones que hemos descrito, la misma lucha por el aumento de los salarios nominales y el mantenimiento de los servicios socia-

les tropieza con dificultades crecientes, pues se reducen progresivamente los márgenes para satisfacerlos; la lucha en este terreno suele ser enconada y requiere muchas veces la intervención del Estado. Pero si a la suma de los reclamos sociales se agrega el de la participación en las ganancias, el resultado no puede ser otro que una exasperación de las tensiones sociales. Ya el sistema impositivo castiga con graves impuestos las llamadas, "ganancias extraordinarias" y las "eventuales"; el empresario suele recurrir a los artilugios de la contabilidad para zafarse de las tenazas del impuesto. Y a este sistema que no le permite el ahorro suficiente para renovar su equipo se le viene a agregar la participación de los obreros en sus beneficios. No es difícil prever cuál puede ser la reacción del empresariado. Es verdad que para apoyar este postulado se esgrimen ejemplos de otros países, de Alemania por ejemplo. Pero sería obvio detenernos aquí a explicar las diferencias abismales que separan la empresa alemana de las empresas de nuestros países subdesarrollados.

Si efectivamente "el camino de la paz pasa por el desarrollo"; sí, como no hay duda, "el desarrollo es el nuevo nombre de la paz"; si "la paz no se reduce a una ausencia de guerra", sino que "se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres", la tarea de los gobernantes es evitar las políticas que exaltan las tensiones sociales, que exciten las luchas de clases tan propicias a la violencia. Parece que éste debiera ser el campo donde pueden moverse en su afán renovador las instancias de la Iglesia tan hondamente preocupadas por la realidad latinoamericana.

2.— Reforma agraria: Tema dominante de la agitación política en América latina es el de la reforma agraria. No solamente lo incluyen en sus programas los partidos de izquierda marxista, sino que es el eje de las reivindicaciones de movimientos revolucionarios no socialistas y de los partidos demócratas cristianos. Organismos internacionales como la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América latina) y programas del tipo de la Alianza para el Progreso propugnan la reforma agraria como punto de partida de la transformación económica y de la justicia social. La acción social de muchos obispos y sacerdotes defiende igualmente este postulado.

La doctrina de esta reforma agraria se confunde con la proposición de dividir y repartir la tierra entre los campesinos. Se afirma que el atraso económico de nuestros países latinoamericanos se origina en el hecho de que la tierra pertenece a unos pocos latifundistas mientras millones de campesinos trabajan la tierra ajena, sometidos a regímenes feudales de explotación. El reparto de la tierra entre quienes la trabajan llenaría dos funciones: satisfacer el hambre de tierra del campesino y atacar el poder político y social de la oligarquía terrateniente, factor principal del atraso.

No puede negarse la existencia objetiva del problema. Es verdad que subsiste en algunos países inmensos latifundios mal explotados y una población rural sometida a condiciones de trabajo y de subsistencia miserables. También es verdad que en otras naciones de América latina la tierra cultivable está explotada racionalmente, que son raros los latifundios improductivos y que la tenencia de la tierra está repartida o arrendada a pequeños y grandes productores que, a su vez, emplean en sus empresas agrícolas mano de obra regida por convenios o leyes protectoras del trabajador. El caso más notorio es el de la Argentina, cuya población rural está formada por propietarios, arrendatarios y asalariados que producen para el mercado y que tienen ingresos comparables a los de cualquier país adelantado, naturalmente en términos relativos.

El error de los "reformistas agrarios" de América latina consiste en atribuir poderes mágicos a la simple reforma del régimen de propiedad de la tierra. Se habla de la función "social" de la tierra como sinónimo de reparto jurídico de la tenencia de los fundos. Es una noción reñida con lo más elemental de la ciencia económica. La tierra es un medio de producción idéntico a las máquinas, las plantas industriales, el transporte. Se rige por las mismas leyes económicas, produce

para el mercado y requiere los mismos elementos: capital, tecnología, mano de obra, exactamente igual a cualquier otra empresa. La función "social" de la tierra no se distingue de la función "social" de una fábrica metalúrgica: consiste en producir abundantemente, a bajo costo, porque lo que es social es el proceso de producción y de consumo, no la tenencia jurídica.

Lo importante, entonces, para mejorar la suerte de nuestras poblaciones predominante agrarias, no es repartir la tierra, sino hacerla producir en condiciones óptimas. Si existen grandes extensiones improductivas, su dueño no es rico por el hecho de poseer este bien inactivo; comienza a ser rico cuando le produce renta. Un latifundista atrasado de Ecuador o Paraguay es menos rico, aunque posea miles de hectáreas, que un arrendatario norteamericano de cincuenta o cien hectáreas explotadas con tecnología moderna y capital. Son estos insumos en dinero, máquinas y productos químicos los que pueden convertir pequeñas extensiones de tierra en unidades altamente productivas y rentables para sus propietarios o inquilinos. Sin estos factores de producción, la tierra no llena función social alguna, aunque haya sido repartida generosamente entre millones de campesinos.

La subdivisión de un latifundio improductivo se justifica cuando tal subdivisión implica entregar la tierra a empresarios capaces de hacerla producir. Del mismo modo, una enorme extensión de tierra, intensivamente explotada, sigue siendo un latifundio en sentido jurídico, pero no lo es en su papel económico, pues cumple con su función social de volcar productos en el mercado. La subdivisión en minifundios, cuyos poseedores carecen de capital y tecnología, es un acto antisocial. Las llamadas "explotaciones agrarias familiares", que son el ideal de algunos reformistas democristianos o políticos liberales, son un anacronismo antisocial; condenan a la familia entera, incluso mujeres y niños, a permanecer clavados en el predio, como un artefacto más, supliendo con tremendo esfuerzo físico y con renuncia a la educación y al esparcimiento espiritual, la ausencia de máquinas y productos químicos de una explotación moderna. Es el retorno a la gleba, bajo la apariencia de la justicia distributiva. Tarde o temprano, los hijos huyen de esta esclavitud y sólo quedan los ancianos. La despoblación de las viejas comunidades agrarias españolas e italianas es ejemplo de este éxodo del pequeño campesino, asfixiado en el cuadro de una economía nacional que avanza hacia la industrialización.

3.— Control de la natalidad: La población del mundo, que hoy supera los 3.200 millones, llegará a 6.000 millones en el año 2.000, como mínimo. Si se repitieran exactamente las tasas de fertilidad actuales, la cifra sería de 7.400 millones. El informe de las Naciones Unidas "Perspectivas de la Población Mundial evaluadas en 1963" admite que habrá alguna restricción en la natalidad para que el aumento de la población en los próximos treinta y dos años determine nada más que la duplicación de la cifra de 1968.

Otras proyecciones estadísticas a muy largo plazo, basadas en el mero cálculo matemático, demuestran que en el año 2.600 la población mundial ocuparía la tierra a razón de un habitante por cada pie cuadrado, incluidos los polos y los desiertos, de mantenerse las tasas actuales de crecimiento demográfico.

Aún en el supuesto de que la cifra de 6.000 millones, que es la más conservadora, se confirme al entrar al año 2.000, es legítima la preocupación de economistas y políticos respecto de lo que ha dado en llamarse la "explosión demográfica" y sus consecuencias en el campo económico social.

El problema es particularmente grave en lo que atañe a los países subdesarrollados donde se registran los mas altos índices de crecimiento demográfico anual: del 1 al 3,5 o/o, comparado con el de los países altamente desarrollados, que oscila entre el 0,5 y el 1,7 o/o. Se calcula que la población de América latina será de 624 millones de habitantes el año 2.000, contra 245 millones de la actual población, o sea casi tres veces más.

Cuando se sale del campo meramente estadístico para internarse en el de las soluciones político-sociales del problema, la tendencia uniforme es a postular como único remedio el control de la natalidad. Y este remedio se propone casi exclusivamente a los pueblos subdesarrollados, ya que se considera que las tasas demográficas del sector desarrollado son normales y no ofrecen peligro.

Nadie se detiene a examinar la razón de este diverso comportamiento demográfico de uno y otro sector del mundo. Sin embargo, en esta razón debe buscarse la verdadera solución del problema.

La llamada "paternidad consciente", o sea la espontánea autolimitación que se observa en las sociedades desarrolladas respecto del número de hijos de la familia promedio, es consecuencia del alto grado de cultura y de racionalidad que distingue a los países económicamente evolucionados. Al revés, la proliferación indiscriminada caracteriza a las sociedades atrasadas y es un signo más de su primitivismo y de su pobreza.

Por consiguiente, es una deformación absoluta del problema demográfico presentarlo como fenómeno aislado de su contexto social e histórico. No hay una cuestión de la natalidad divorciada del más amplio cuadro del subdesarrollo que aflige a naciones que abarcan dos tercios de la población mundial. Ni se puede solucionar el problema de la explosión demográfica sin resolver el problema del atraso material y cultural de los pueblos en que este fenómeno ocurre.

Los organismos internacionales y la mayor parte de los tratadistas que se han ocupado del tema se empeñan en relacionar el fenómeno de crecimiento demográfico con el del déficit de la producción de alimentos. La ecuación alimentos-población parecería ser la clave. Bastaría con desarrollar una política de ayuda internacional tendiente a modernizar el agro y las pesquerías de las naciones subdesarrolladas para que desapareciera el déficit alimenticio en relación con el aumento de la población. Entretanto, mientras se desenvuelve esa modernización de la producción de alimentos, la única solución factible e inmediata es la de difundir el control de la natalidad y los métodos anticonceptivos en las sociedades atrasadas de Asia, Africa y América latina. Menos bocas para alimentar hasta que se produzcan suficientes alimentos.

Esta política prestigiada por los mas altos niveles de la organización internacional es, a todas luces, una política reaccionaria, inmoral y antihistórica.

Es reaccionaria, porque acepta la condición irreversible del subdesarrollo de la gran mayoría de la humanidad. Es inmoral, porque discrimina en contra de los pueblos pobres a los que se exige que limiten su prole para que el nivel de la población se mantenga al nivel de la producción. Es antihistórica, porque la pretensión de confinar a estos pueblos en sus actuales límites de atraso y subdesarrollo es contraria a la tendencia irreprimible del avance social de todas las naciones sin excepción. Hasta hay algo de racismo vergonzante en la tesis de la limitación de la natalidad de los asiáticos, los africanos y los latinoamericanos. Se trataría de evitar la proliferación de las "razas inferiores".

El problema del déficit alimentario es falso, a la luz de los constantes descubrimientos científicos y tecnológicos que permiten multiplicar la incorporación de nuevas tierras a la producción (actualmente la humanidad explota una pequeña fracción de las tierras cultivables del planeta) y que agregan insumos técnicos a la explotación en forma de máquinas, plaguicidas y abonos artificiales. Son todavía incipientes la exploración y explotación de las riquezas del mar y enorme el horizonte que se abre en este campo. La ciencia y la técnica moderna están en camino de producir cantidades ilimitadas de alimentos naturales y artificiales.

Explotar los desiertos y las montañas, el fondo del mar y el espacio ultraterrestre y crear en el laboratorio alimentos y bienes para abastecer el consumo del doble o del triple de la población actual del mundo es una perspectiva que echa por tierra casi toda la literatura del "hambre".

La humanidad posee los elementos para asegurar el reino de la abundancia a todos los pueblos. Por lo tanto, es doblemente injusto e inmoral propugnar soluciones que consisten en perpetuar la miseria y coartar la libertad de la especie. En lugar de ofrecer píldoras anticonceptivas a los pueblos pobres y en ayudarlos para que sigan siendo pueblos pastores, agricultores y mineros, creyendo así paliar su hambre, es necesario colocarse en la dirección que señala la historia: contribuir a financiar y a acelerar el desarrollo industrial que permitirá a los pueblos rezagados elevarse a los niveles económicos, sociales y culturales de las naciones del hemisferio norte. El crecimiento de las fuerzas productivas, la integración del agro y la minería con las formas avanzadas de la producción industrial son los factores que permitirán resolver orgánicamente el pretendido problema del déficit alimentario y del exceso de población. Hay que erigir una economía para la población y no una población para la economía. Lo primero es progreso y justicia. Lo segundo es malthusianismo reaccionario y un desafío a las leyes divinas que consagran la igualdad de los hombres y los pueblos.

La industrialización integral del mundo subdesarrollado es la respuesta cabal y la única efectiva y posible al problema de incrementar la productividad del agro y producir suficientes alimentos para el mundo. La experiencia histórica demuestra que sólo los países altamente industrializados han sido capaces de multiplicar la productividad de la agricultura y de explotar intensamente las riquezas marinas. La ciencia de la moderna revolución industrial está creando alimentos en las probetas de la fotosíntesis y de la biología.

4.— Integración regional latinoamericana: ¿Cuáles son los pilares básicos de la integración regional? . No es, desde luego, la conciencia de la ulterior integración de la economía mundial, resultado del proceso de concentración y centralización que se está operando tanto en los marcos del sistema capitalista como en el socialista, de la caída de las barreras ideológicas que fraccionan el mercado mundial y por tanto de la aceleración de los intercambios. Este componente histórico tendencial no entra en los cálculos de las ideologías de la integración. Sus pilares básicos pueden reducirse a dos, el uno apenas esbozado, el otro abiertamente expresado y explicitado: a) una nueva división internacional del trabajo, dentro de la cual cada país, zona o región se ha de especializar en una rama de la producción; b) un criterio de economicidad, según el cual los distintos países han de producir aquello para lo cual tienen mayores aptitudes históricas, v.gr., en la Argentina, la ganadería; en Bolivia, la minería del estaño; en Brasil, el hierro; en Chile, el cobre, y así de seguido. La economicidad implica, a la vez, el criterio de complementación: la Argentina no tendría necesidad de producir hierro, carbón y cobre, pues ya los produce Chile; Chile, a su vez, no tendría que alentar la producción agropecuaria, pues a cambio de sus minerales la Argentina podría darle carne y cereales en abundancia.

Los pasos previos a la integración y complementación de las economías han sido (en los casos de la ALALC y del Mercado Común Centro Americano) la eliminación progresiva de los recargos aduaneros para los productos que se incluyen en una llamada "lista común"; en el caso de la ALALC el objetivo es alcanzar la plena liberación de los aforos hacia los primeros años de 1970. Pero ya en estos pasos previos se contienen todos los elementos de una distorsión de las economías, de anulación del proceso de desarrollo.

En efecto, tal como ha ocurrido en los países del Mercado Común Europeo, la política tarifaria no es suficiente para alcanzar una integración de las economías ni mucho menos para defender la región integrada de la acción de los monopolios externos. Por el contrario, liberada la zona de que se trata de todas las defensas del factor exterior, este actuará en el espacio geográfico con mayor "libertad", en un "espacio económico" más amplio, más propicio a la expansión de los monopolios. Pues se ha de saber que el monopolio ya estaba instalado en la mayoría de las

zonas que componen la América latina, frenando o expandiendo la producción a la medida de sus conveniencias. Pero el monopolio tropezaba aquí con las altas tarifas proteccionistas con que cada uno de los países había defendido sus producciones tradicionales o las ramas industriales en desarrollo; esa política proteccionista se había incrementado en la postguerra con el acceso al poder de los movimientos nacionalistas populares.

Esa política proteccionista era condición sine que non para que las débiles y precarias bases industriales se desarrollaran y conquistaran o crearan su propio mercado interno. Hasta la aparición de los intentos "integradores" éste era el proceso que se estaba operando, en algunos lugares más aceleradamente (Argentina, Brasil, México, Chile), en otros más lentamente. El rasgo principal de este proceso industrial era que se operaba en la esfera de la industria liviana, la que satisface las necesidades inmediatas del consumo ciudadano. Pronto fue evidente que la industria liviana engendraba una nueva forma de dependencia exterior.

Evidentemente, el desarrollo de esta industria demandaba cantidades crecientes de materias primas industriales, de maquinarias, de combustibles, de productos químicos. Los gobiernos nacionales comenzaron entonces a sentir la necesidad de instalar la industria pesada, a partir de la siderurgia y la quimiurgia; más tarde, la instalación de la industria de automotores y de maquinaria agrícola. Esto tendía a impulsar la búsqueda de materias primas (hierro, carbón, petróleo, minerales no ferrosos). Este proceso no estaba programado ni planeado, no respondía ciertamente a un sistema de prioridades estructurado. Era una tendencia general que, partiendo de las mismas necesidades que engendraba el desarrollo industrial, iba a la búsqueda de sus bases autónomas.

Pero el paso de la industria liviana a la industria pesada exigía grandes inversiones que no podían ser satisfechas con el solo producto de las exportaciones. Pues se estaba operando al mismo tiempo un acelerado crecimiento demográfico — particularmente acusado en América latina — una concentración en las ciudades y un reclamo de mayores niveles de vida que iban absorbiendo los saldos exportables. El comercio exterior, la exportación, ya no era fuente de acumulación para las grandes inversiones que se requerían. A lo cual debe agregarse el fenómeno moderno permanente del deterioro de los términos del intercambio. Los sectores nacionalistas populares más esclarecidos hallaron la salida de la dificultad planteando la posibilidad de hallar fuentes de financiación de estas grandes inversiones en la cooperación internacional.

Fue entonces, cuando ya se perfilaba una solución integral al gran problema del subdesarrollo, cuando arrieron las tendencias "integradoras". Los criterios de "complementación" y de "economicidad" fueron expuestos y explicitados en numerosos trabajos y conferencias continentales; tuvieron el apoyo caluroso de grupos reformistas y de grupos conservadores. Por último, las grandes potencias les prestaron calor y promesas de financiación para "proyectos comunes" o "conjuntos"; algunos bancos internacionales se transformaron en bancos para la integración, sus fondos derivaron cada día más hacia la financiación de estos proyectos.

Es de suponer que, deliberadamente o no, la "integración" y la complementación venían a oponerse a lo que ya era una tendencia en marcha. Paralizaban los intentos integradores de carácter nacional en homenaje a una integración regional en perspectiva; desarmaban los dispositivos de defensa de la economía industrial en marcha y desviaban hacia otros objetivos los esfuerzos que ya estaban empeñados.

Pero, sobre todo, se soslayaba el contenido histórico-político del desarrollo, a saber, la construcción de la Nación. Los países de América latina no han completado aún el proceso de construcción nacional. La unidad nacional está en las leyes y en las constituciones; en la realidad, aparece fraccionada y las regiones aisladas entre sí. Junto a los grandes centros poblados se extienden vastas regiones que viven en el aislamiento; al lado de las conquistas de la civilización está el más profundo atraso. Estos fenómenos adquieren forma muy acusada en los países con gran po-

blación indígena, donde el idioma nacional es ignorado por la mayor parte de los pobladores. Pero también en los países sin diferenciación racial y religiosa, como la Argentina, cuyos dos polos, el noroeste y la Patagonia, permanecen en el aislamiento y en el atraso y donde aun regiones relativamente pobladas y con producciones estimables caen en crisis por falta de vías de comunicación.

A la Patagonia argentina, semidesértica y por tanto sin mercado actual, cuándo le tocaría su cuota de electrificación, siderurgia, industrialización en general? ¿Y el nordeste de Brasil? ¿Quién promovería ese cuasi continente segregado del mercado capitalista, sin capacidad presente de consumo?

En los dos ejemplos extraídos al azar, la integración y el desarrollo de ambas zonas sólo pueden ser abordados por sus sendos estados nacionales. Ninguna otra instancia puede salvarlos de su actual estado de atraso e indefensión y, justamente, por razones nacionales, de solidaridad nacida en la historia, en el idioma, en el territorio, en la cultura comunes. Todas las razones de economía inmediata y de plazo medio determinarían llevar esos factores de desarrollo a los sectores donde actualmente existe población solvente y, en consecuencia, mercado.

Todavía habría que responder a este interrogante que entraña una objeción: ¿Por qué se es menos nación cuando se importa acero, celulosa o petroquímica, que cuando se elaboran estos productos y elementos en el propio territorio nacional? Por una doble razón. Por una parte está la cuestión fundamental de la autodeterminación que acabamos de examinar, cuyas bases materiales residen precisamente en la capacidad de disponer, sin limitaciones impuestas desde fuera, de aquellos elementos reproductivos de riqueza idóneos para promover el crecimiento económico a ritmo adecuado. Por otra parte, el proceso económico, cuanto más complejo y completo es, engendra a su vez una más rápida evolución de la técnica y de la ciencia; es decir, eleva la condición de los habitantes y de todas las regiones del país de que se trate. Los integra y desarrolla en función del interés nacional que es distinto y casi siempre opuesto, tanto a la alta tasa de beneficio de los monopolios como al principio de la economicidad erigido en contra de la experiencia histórica del desarrollo económico (en el capitalismo y en el socialismo).

En tales condiciones, el desarrollo económico adquiría dimensión en profundidad, en cuanto se trataba de erigir las bases de una economía moderna, y en extensión, en cuanto se trataba de extender sus beneficios a todas las regiones, enlazándolas con un vasto sistema de comunicaciones. Se trataba y se trata de construir las bases materiales de la nacionalidad, sin las cuales — como está ya probado suficientemente — todos los factores de orden cultural y ético — la religión y la educación o bien decaen, o bien se deforman en una suerte de barbarie moderna. El maestro o el misionero no pueden llegar de manera suficiente, y cuando llegan no tienen en sus manos los elementos que le permitan incorporar esas poblaciones a la vida de relación. Es la experiencia de los misioneros en las regiones de indígenas.

Lo que comunmente se ha llamado “problema nacional” ha adquirido en los años de la postguerra una dimensión y una fuerza realmente inusitadas. En Europa, a causa de la larga ocupación por fuerzas extranjeras de la mayor parte de los países, viejas civilizaciones de un alto nivel cultural sometidas a la opresión extraña. En Asia y África, fue la quiebra definitiva del colonialismo lo que ha dado origen al desarrollo del sentimiento nacional en las antiguas nacionalidades, y a la aparición explosiva de ese sentimiento en las nacionalidades que ahora se constituyen (especialmente en África). Esos pueblos reconstruyen su historia, recuperan sus religiones originarias y sus ideas, hacen renacer el folklore; inmediatamente se dan planes o programas de desarrollo económico y social, quieren salir del atraso a que los condenó la potencia colonizadora.

En los planes de integración se ha avanzado ya bastante en torno de la articulación de una especie de gobierno supranacional. En efecto, los más eminentes expositores del pensamiento integrador han llegado a la conclusión de que las medidas y los organismos puestos en marcha has-

ta ahora no han sido suficientemente efectivos para llevar el proceso de integración hasta sus últimas consecuencias. Se impone, pues, según ellos, arbitrar otras medidas más enérgicas y más efectivas, para lo cual se requiere algo más que las meras reuniones de funcionarios autorizados. Se requiere la constitución de un verdadero gobierno supranacional.

Pero podría objetarse que este punto de vista es el de aquellas naciones del continente que mejores condiciones naturales reúnen para edificar una economía integrada dentro de sus fronteras o que disponen de un nivel económico que se acerca más al del pleno desarrollo; se justificarían, pues, sus aprensiones hacia todo aquello que pudiera postergar o atenuar su propio y rápido desarrollo. En cambio, ¿qué sucede con los países pequeños, con menos población, con una producción puramente agropecuaria o minera, con una industria de transformación embrionaria? . Nos referimos, es claro, a Bolivia, Paraguay, Ecuador. Para ellas, la integración tendría un significado distinto: el de un acceso más rápido a los niveles de producción de sus hermanas "mayores" pues ni la liberación aduanera ni la complementación amenazarían sus bases de sustentación. En otras palabras, no se podría invadir el Paraguay con las carnes argentinas, pues este país las produce; ni Bolivia con los minerales chilenos. En cambio, Chile y Argentina necesitan, por ejemplo, de las maderas paraguayas.

Pero bien visto, este criterio se detiene en los niveles puramente comerciales del problema. Es, por otra parte, el criterio o uno de los criterios de los constructores ideológicos de la integración regional. En realidad, la integración estaría destinada a liberar y acelerar los intercambios comerciales. Pero se comercia lo que se tiene y no lo que se debiera tener dentro de lo que se estima como una economía moderna. El comercio puede ser liberado y acelerado sin que cambien las producciones que se venden o se compran. Y el desarrollo, bien entendido, no es el de los intercambios sino el de las producciones. Venezuela puede vender todo el petróleo que produce y aun mucho más, pero seguirá siendo así un país nonoprodutor y, por tanto, subdesarrollado, indistintamente de que la venta de su petróleo le produzca un ingreso per capita superior al de cualquier otro país de América latina. La liberación de derechos puede facilitar la colocación en masa de las magníficas maderas, de la yerba mate o del tanino paraguayo; pueden, así aumentar sus ingresos y, por tanto, aumentar sus importaciones; pero este acontecer no alterará en nada su condición de productor de materias primas. Lo mismo dígase del estaño boliviano.

No se postula, desde luego, que esos países alcancen iguales niveles o grados de integración económica que los que pueden lograr Argentina, Brasil o México. Algunos carecen de condiciones naturales para una agricultura y una ganadería similares a las de la Argentina; otras carecen de recursos minerales de la riqueza de Brasil. Se aplicaría a estos países entonces el ejemplo de Italia, Japón o Suiza, que han alcanzado un alto grado de desarrollo industrial y agrario careciendo de recursos minerales y de tierras fértiles suficientes y vastas. Recorrerán este camino con mayor o menor ritmo, pero deberán recorrerlo. Si desde ahora se empeñan en alcanzar mayores niveles de vida confiando todo a la integración, retrasarán su desarrollo y acentuarán el de aquellas ramas que los caracterizan como subdesarrollados.

De cualquier manera, el aspecto puramente económico de la integración debe considerarse en el nuevo marco de la permanencia histórica del concepto de nación, de la obligatoriedad de resguardar sus esencias espirituales, de la necesidad de construir sus bases materiales. Hemos partido de la conciencia de que la interdependencia de las naciones es insoslayable, de que estamos viviendo el proceso de integración del mercado mundial, que poco a poco las fórmulas de la convivencia y la negociación amigable están sustituyendo la agresividad y la guerra fría de ayer. Sabemos, por otra parte, que, en su esencia, tanto el régimen capitalista como el socialista tienden a universalizarse. Pero todo este proceso es un resultado no un requisito previo; el resultado del desarrollo de cada una de las nacionalidades de acuerdo con sus rasgos más específicos. Un acuerdo uni-

versal sobre los problemas que actualmente dividen al mundo será un acuerdo entre naciones soberanas, independientes, diferenciadas.

III. LOS METODOS.-

Si la crisis estructural de América latina no admite soluciones fáciles, ni paliativos que se refieren más a los efectos de esa crisis que a sus causas, como se ha visto precedentemente, tampoco puede incurrirse en error cuando se eligen los métodos para llevar a efecto la transformación requerida.

El proceso de modernización de la estructura económica para convertir a cada nación de América latina en una sociedad industrial es complejo y universal en cuanto a los factores que han de ejecutarlo y la estrategia que ellos deben seguir.

Para que la modernización se haga sobre bases estables y orgánicas, debe estar asentada en el consenso de todos los sectores sociales interesados en el cambio. Ellos son los productores agrarios e industriales, la clase media, los trabajadores de la ciudad y del campo, los técnicos, la inteligencia, la juventud, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Cada uno de estos sectores se beneficia del progreso e independencia del país en cuanto satisface sus intereses materiales o espirituales y en cuanto la prosperidad de la nación y el bienestar creciente de su pueblo es un ideal común a todos ellos.

Parcializar el problema y encuadrarlo en el enfrentamiento de clases y sectores equivale a trasladar a las naciones subdesarrolladas las diferencias sectoriales que son propias de sociedades más evolucionadas. En los países subdesarrollados no se trata de disputar el reparto de la riqueza, sino aunar fuerza para crear riqueza, para constituir naciones plenamente integradas. Y en este objetivo coinciden patronos y obreros, militares y civiles, religiosos y laicos.

Es fácil preconizar métodos expeditivos para remediar la angustiosa situación social de los pueblos atrasados. Más difícil es elaborar una política que sea apta para producir efectos perdurables. Pero todos tenemos la responsabilidad de analizar el tema con serenidad y de soslayar la cómoda receta de las acciones impremeditadas. Una de ellas es el recurso a los métodos violentos.

El mundo subdesarrollado está lleno de elementos de violencia. Anhelos ancestrales de independencia nacional en las viejas civilizaciones, que quieren sofocar las grandes potencias; sed de justicia social incomprensibles por las oligarquías y una serie de frustraciones parecieran haber agotado los caminos pacíficos normales del progreso económico y de la justicia social, y que sólo la violencia, la insurrección, la guerrilla fueran la única alternativa que se ofrece a los pueblos.

Siempre y en todas partes, los partidarios de la violencia parten de la certidumbre de que los medios pacíficos para emerger del subdesarrollo han sido frustrados. Este es uno de los componentes de la teoría de la violencia que no se puede soslayar. El otro tiene origen en la urgencia y por tanto en la impaciencia por alcanzar ahora mismo las metas de la independencia nacional y de la justicia social. El camino pacífico, se dice, es lento y doloroso, siempre expuesto a los golpes que pueden anular lo conquistado, paralizar el proceso de desarrollo y regresar al pasado; el camino de la violencia revolucionaria sería más corto y menos doloroso.

Evidentemente, la impaciencia y las frustraciones son datos de una realidad que salta a la vista. La impaciencia es auténtica porque está dictada por la "urgencia de la acción" (Pop.Prog., 1,29), porque los pueblos ya no quieren aguardar más, porque es cada día más profundo el abismo que separa al mundo desarrollado del mundo subdesarrollado. También es auténtico el sentimiento de frustración: la historia de América latina es la historia de las derrotas de los movimientos nacionales democráticos, de los fracasos de las tentativas reformistas, de la negación de los

derechos conquistados por las mayorías populares, de los fraudes electorales, de los golpes de Estado reaccionarios. Es lógico, pues, que la juventud se vea arrastrada por la "tentación de la violencia". Bien lo dice Pablo VI: "Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana."

A lo que debe agregarse el espejismo de los éxitos fáciles. En América latina, la revolución cubana es presentada por los ideólogos —y aun por los principales actores de la misma— como una feliz aventura que comienza en un punto dado por la arbitraria decisión de un grupo de audaces y que termina breve y venturosamente con el derrumbe de un poder ominoso. Frente a la larga cadena de frustraciones se levanta este ejemplo exitoso. ¿Qué se necesita para lograr tan afortunado desenlace? Se necesita —lo ha dicho Fidel Castro— querer hacer la revolución, nada más. Naturalmente, las experiencias negativas de la revolución no se contabilizan, más bien se ocultan, ni se intenta explicarlas. Esta línea de violencia guerrillera es una línea marcada por una larga serie de derrotas y de fracasos en los que se han estrellado los afanes de transformación de una parte de nuestra juventud. No hay duda de que a la larga —y mucho más después de la desgraciada aventura de Guevara en Bolivia— estos fracasos harán reflexionar a la juventud y terminarán por obligar a sus propagandistas a modificar su visión de las cosas.

Una vez que se ha dilucidado el origen de las teorías de la violencia, es necesario precisar su real dimensión. Se puede afirmar sin lugar a duda que las masas del trabajo (obreros urbanos y rurales, campesinos) de América latina no se inclinan hacia los caminos de la violencia, y aun el mismo estudiantado es tocado por esas teorías en sectores muy limitados. Los trabajadores organizados en sindicatos han permanecido por completo ajenos a la prédica violenta y han llegado a rechazarla; es digno de destacar el hecho de que no sólo los sindicatos dirigidos por elementos llamados "reformistas" sean impermeables a las incitaciones del "camino violento", sino también los dirigidos por elementos comunistas (Chile) o simplemente revolucionarios (Bolivia). Por el contrario, en los sindicatos —aun en los orientados por estos elementos comunistas o revolucionarios— se abre paso aceleradamente la tendencia a establecer acuerdos o alianzas con otras clases de la sociedad; superando viejos prejuicios anticlericales y antimilitaristas, los sindicatos de estas orientaciones entran en diálogo franco con las más altas magistraturas de la Iglesia y con los mandos de las fuerzas armadas. Algunos de ellos han formulado planes de desarrollo económico que significan, de hecho, propiciar el crecimiento de las fuerzas del capitalismo.

Los movimientos nacionales y populares, aun los que han debido su triunfo a levantamientos o pronunciamientos militares, desembocan siempre en soluciones electorales. Por su misma índole, por su composición social, por su extensión, estos grandes movimientos se canalizan mejor dentro de pautas de carácter pacífico y evolutivo; la misma revolución mejicana lo prueba; la verdadera revolución agraria y la verdadera reforma social se producen con el advenimiento electoral del general Lázaro Cárdenas, y de allí en adelante, a través de sucesivos gobiernos legales, se llega al grado de desarrollo que con orgullo ostenta hoy esta gran nación. El movimiento nacional puede adoptar —cuando se le niega el acceso a las soluciones pacíficas— una actitud puramente negativa, v. gr., la abstención electoral. Pero el paso a la actividad violenta casi siempre escinde el movimiento, que queda reducido entonces a lo que llamaríamos las "vanguardias" más decididas, pero siempre minoritarias. Los movimientos nacionales democráticos, los movimientos sindicales y agrarios no eligen espontáneamente el camino de la violencia; en todo caso, son conminados, empujados a la violencia por los poderes que se obstinan en no dejar paso a las transformaciones de las estructuras arcaicas e injustas.

Este aspecto del problema, el de la violencia no querida, no elegida, merece mayor explica—

ción. América latina está madura para una revolución. Se puede excluir, a priori, el camino de la violencia, de la insurrección, de la guerrilla (desde luego que éste, en la concepción cubana del "foco guerrillero" debe excluirse absolutamente), pero no se puede negar la necesidad de esta revolución. La revolución social significa la transformación de las estructuras tradicionales que hoy se propugna en todos los programas de los movimientos nacionales democráticos, en los más importantes documentos de la Iglesia, en las expresiones de los grupos más esclarecidos de las fuerzas armadas; una revolución de esta índole quería el presidente Kennedy. Se trata, primero, de una revolución nacional, pues responde a las exigencias de una realidad específicamente nacional, no asimilable a las demás; es una revolución argentina, boliviana, etc., con sus tareas y fines propios; segundo, se trata de una revolución democrática, pues expresa los afanes de la inmensa mayoría de nuestros pueblos. Es naturalmente pacífica, pues no se propone destruir sino transformar; no se propone excluir a ninguna clase o sector social, más bien tiende a integrarlos en un todo. A la lucha de clases opone el acuerdo entre las clases.

Una revolución así, insistimos, es esencialmente pacífica. Por eso, los movimientos nacionales de que hablamos se colocan en el terreno de la legalidad para disputar desde allí el poder que democráticamente les corresponde. Pero la solución no está sólo en manos del movimiento nacional de las mayorías, está también en manos de la minoría gobernante; si ella se obstina en cerrar los caminos de las soluciones pacíficas, electorales, democráticas, el camino de la violencia revolucionario queda abierto. Lo ha advertido sabiamente Paulo VI, cuando después de condenar "la insurrección revolucionaria" hace salvedad expresa del "caso de la tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente contra los derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien de la comunidad." Es claro que un movimiento nacional de gran amplitud puede ejercer una presión tan poderosa que obligue a los poderes caducos a abrir el camino de las soluciones legales; la historia está llena de ejemplos de esa índole. Pero también es verdad que es muy grande la obstinación de los que detentan esos poderes ya caducos, y es verdad que muchas veces son ellos los que ejercen la violencia y provocan una reacción también violenta.

Otro problema suele presentarse y se presenta en la realidad tal como lo prueban no pocas y recientes experiencias: el de la impaciencia de algunos sectores. Generalmente el movimiento nacional llega al poder cuando ya la estructura anterior ha agotado sus posibilidades; los recursos de que se dispone para iniciar el turno del desarrollo son pocos y pobres. Es preciso, pues, establecer una severa política de ahorro (contención de los gastos) y de acumulación; el capital nacional y el que se obtenga por la cooperación internacional debe ser invertido en un riguroso orden de prioridades. Pero el movimiento nacional es siempre de vastísima composición popular; las clases a las cuales el subdesarrollo ha lanzado a la marginalidad social y al subconsumo exigen del gobierno popular la satisfacción de sus necesidades y no se paran a medir en qué proporción pueden ser satisfechas dentro de una política de ahorro y acumulación. Esas clases, especialmente los trabajadores, aprovechan el nuevo clima de libertades para organizarse y lanzarse a la lucha en demanda de soluciones para sus problemas sociales. El movimiento nacional debe avanzar muy de prisa, a un ritmo muy acelerado, para alcanzar un grado de desarrollo que le permita elevar sustancialmente el nivel de vida de los trabajadores; pero los dirigentes de los trabajadores exigen que avance mucho más rápido aun en la solución de los problemas sociales. Así, política económica y política social parecen entrar en conflicto, cuando en realidad son inseparables. Porque, en efecto, en nuestra época, el desarrollo económico debe llevar consigo un alto contenido social, pero el desarrollo implica también, por lo menos en la etapa del despegue, una cierta postergación de las soluciones de carácter social. Hay, pues, de hecho, una prelación del momento económico respecto del momento social; la dimensión de la política social dependerá siempre del grado de desarrollo económico más que de las inclinaciones sobre la justicia de los nuevos gobernantes. He a-

quí un punto sobre el cual está llamado a actuar la Iglesia, que, en estos países de la América latina, ejerce gran influencia espiritual y moral sobre vastos sectores del trabajo. Y es un punto en torno del cual se mueven muy activamente no pocos jóvenes sacerdotes, conmovidos por la dramática realidad que viven y alentados en sus afanes de justicia social por el sopro renovador de la Iglesia del Concilio. Ellos muestran a veces tanta o más impaciencia que los antiguos dirigentes sindicales; carentes de la experiencia de éstos, suelen lanzarse a acciones desesperadas que terminan en represiones o en derrotas; las derrotas y las represiones, lejos de hacerles reflexionar sobre la invalidez de sus tácticas, los conducen a la búsqueda de nuevas armas de lucha. Es entonces cuando asoma la "tentación de la violencia".

El resultado final de estas impaciencias es el quebrantamiento del movimiento nacional, la crisis política subsiguiente y, por fin, la activación de las conspiraciones de las fuerzas desplazadas del poder. Paradójicamente, el gobierno que representa las mayorías populares, el que se rige dentro de las normas más democráticas, el que intenta la solución de los graves y grandes problemas económico-sociales según planes preestablecidos, aparece en la superficie como el gobierno del desorden económico y del caos social. Mientras las fuerzas del conservadurismo lo acusan de abrir cauce a la revolución social o, como se dice vulgarmente, al comunismo, las fuerzas renovadoras que se albergan en su seno le acusan de complicidad con el conservadurismo y con el enemigo exterior en razón de la lentitud con que procede a satisfacer las demandas del trabajo organizado. Las fuerzas armadas, que en nuestros países son un factor eminente de integración nacional y social, se sienten alarmadas por este desorden aparente y son continua y sutilmente incitadas a restablecer el orden y a desplazar por la fuerza al poder legalmente constituido. He ahí el origen de muchos de los golpes militares que han derribado gobiernos de índole popular y de tendencia nacional.

IV. CONCLUSIONES.-

1.— La crisis de América latina es la crisis de todas las regiones subdesarrolladas. Son naciones primordialmente agromineras, que se sostienen con el producto de sus exportaciones de materias primas y alimentos. En nuestro tiempo, este ingreso es insuficiente para asegurarles un ritmo sostenido de crecimiento. Están condenadas al estancamiento económico y a la progresiva pauperización de sus pueblos.

2.— La única solución orgánica y estable de esta crisis consiste en quebrar esa estructura económica primitiva y crecientemente deficitaria, mediante una política sistemática de acumulación de capital interno y de atracción del capital internacional para aplicarlos a inversiones en la industria de base (energía, siderurgia, petroquímica, máquinas-herramienta) y a la construcción de una infraestructura moderna de servicios, comunicaciones y transportes. Esta política debe programar las prioridades de inversión en los rubros citados de la industria de base y la infraestructura. No puede dejarse el proceso a la acción lenta y espontánea de las fuerzas de la economía, porque el ritmo de la transformación es vital para impedir tensiones y estallidos sociales.

3.— Tampoco deben aceptarse soluciones engañosas que se aparten de esa política económica de industrialización integral, ni paliativos sociales que no remueven las causas de la crisis sino que obran sobre sus efectos.

4.— Así, no pueden ser soluciones permanentes la redistribución del ingreso, la reforma agraria que se limita al reparto de tierras, el control de la natalidad ni la integración económica regional de naciones no integradas y débiles.

5.— El método de la violencia es moralmente inaceptable y socialmente ineficaz en esta

época de irreprimible vocación pacífica y cuando existen condiciones objetivas e históricas que permiten alcanzar las metas del desarrollo y el bienestar de los pueblos en el marco de la convivencia y la cooperación internacionales y de la alianza de clases y sectores nacionales.

La violencia, en este contexto, es una provocación que desata la opresión y la represión de los grandes intereses económicos y políticos empeñados en mantener el atraso y la dependencia de los pueblos subdesarrollados.

6.— Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, también la paz es el mejor factor de desarrollo. La acción pastoral de la Iglesia y la de todos los sectores nacionales que generen el progreso y la justicia deben converger hacia la promoción de grandes movimientos político—sociales en cada país de América latina, que sean síntesis de los intereses e ideales de todos los sectores: el naciente empresariado nacional, los trabajadores, la clase media, la inteligencia, la juventud, las Fuerzas Armadas y la Iglesia.

Estos movimientos nacionales, expresión de unidad y decisión, son los instrumentos idóneos para hacer la revolución que necesita América latina: la revolución del desarrollo.

Todos los sectores mencionados deben contribuir a la clarificación de objetivos y métodos para disipar la confusión, para evitar caer en soluciones falaces y para no dejarse tentar por el fácil, pero inoperante, camino de la violencia.

